

## En un episodio tragicómico no se sabe si llorar o reír

Alfredo Acle Tomasini©

Hace seis años, cuando el PRI perdió la presidencia de la República, muchos supusieron que esto era suficiente para transformar la cultura política del país, alejándola de los vicios del presidencialismo que concentraba en la voluntad de un solo hombre una enorme dosis de poder político, para acercarla al imperio de las instituciones donde, en teoría, el protagonismo individual sería reemplazado por una acción colectiva que, basada en valores sociales, salvaguardaría, antes que nada, al interés público.

Ciertamente, poco queda del aquel mayúsculo poder presidencial que controlaba como si fuera un solo ente: a los poderes públicos en los tres órdenes de gobierno; al otrora partido mayoritario; así como a las organizaciones e individuos que a él se adherían, oficial y oficiosamente. Pero, nuestra realidad política y sus actores, incluyendo entre éstos a los medios y a los propios ciudadanos, nos indican que la vida del país está todavía muy lejos de verse inmersa en una cultura donde las instituciones estén por encima de los hombres.

Parece que ese papel de árbitro de última instancia que jugaba el presidente de la República, y que servía para resolver – por las buenas o las malas – los conflictos políticos, no ha podido sustituirse por el funcionamiento de las instituciones, que sucumben ante el voluntarismo de los protagonistas, quiénes al poner sus intereses por encima de ellas, las debilitan, retardan la evolución política del país y crean un ambiente confuso que raya en un surrealismo patético.

Al decidir convertirse en una caricatura de sí mismo que, como si fuera una obra churrigueresca en constante evolución, no cesa de sorprendernos por la complejidad y lo inverosímil de sus rebuscados detalles, López Obrador asume, por tiempo indefinido, la presidencia “legítima” de su imaginaria república; jura guardar y hacer guardar lo que él supone es su constitución, y, en el extremo de lo absurdo, pide al pueblo que de no hacerlo que así se lo demande. Y entonces ¿a cuál pueblo pertenece la mayoría de los mexicanos que no pueden demandarle nada, porque en el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, no lo eligieron para nada?

Por su parte, los diputados y senadores del PRD fueron electos en la misma elección que llevó a Calderón a la presidencia de la República; el común denominador de éste con todos ellos es que los votos que les permitieron hacerse de un cargo de elección popular, fueron contados por exactamente las mismas personas y sancionados por la misma institución electoral.

No obstante, cuestionan la legitimidad del presidente electo. Aducen que fueron las imprudencias de Fox las que inclinaron la balanza. Pero con ello retan la memoria e inteligencia de los capitalinos, que sin dejar de reconocer las pifias del jefe del Ejecutivo, no olvidamos cinco años de una tenaz campaña política cuyo destino fue, desde sus inicios, la silla presidencial, y que significó un intenso uso del poder público y de los recursos mediáticos y financieros a su alcance, lo que permitió acomodar una agenda de gobierno a la conveniencia del transitorio mandatario y no al interés de la ciudadanía, cuya visión de futuro bien rebasa un quinquenio.

Pero si el vacío que dejó el desvanecimiento del presidencialismo no lo han podido llenar las instituciones, porque para que éstas funcionen es preciso que todos las reconozcan y acaten sus reglas, subsiste en cambio el concepto patrimonialista del poder público, a partir del cual sus temporales ocupantes asumen como propios los medios, las funciones y los bienes que tienen a su cargo, usufructuándolos a plenitud y sin rendir cuentas a su real dueño: el pueblo.

Al observar el sabotaje al informe y escuchar la amenazas de hacer lo mismo con la toma de protesta, no resulta difícil entender que esas conductas crean un abismo entre los ciudadanos y sus supuestos representantes, porque los primeros no se ven reflejados en éstos. Divorcio que revela un desinterés recíproco, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos no conocen el nombre de sus representantes y tampoco les interesa saberlo.

Las instituciones son el andamio del progreso; su fortaleza nos posibilita a lograr nuevas alturas; su carencia nos condena al terreno plano y a la visión a ras de piso. Ahí afloran los intereses individuales que convierten a la política en parodia y al reclamo de legitimidad en un episodio tragicómico, donde no se sabe si llorar o reír.